



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero  
y Ponente

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 18 de julio de 2006, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## DICTAMEN

### I

#### ANTECEDENTES DE HECHO

El día 10 de marzo de 2006 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados por el jabalí en unos terrenos*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 13 de marzo de 2006, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 294/2006, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Fernández Costales.

**Primero.-** Con fecha 22 de septiembre de 2005, se recibe en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx una reclamación de indemnización, presentada por D. xxxxx, debido a los daños producidos por el jabalí en unos terrenos de su propiedad, en distintos parajes de la localidad de xxxxx, dentro de una zona cinegética declarada vedado obligatorio. No señala fecha estimada de producción del daño.



El agente medioambiental informa, el 3 de octubre de 2005, de que "se certificaron los daños en los (...) parajes y en cantidad, aproximadamente, como indican en su solicitud".

**Segundo.-** Con fecha 20 de octubre de 2005 se notifica al interesado el Acuerdo del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia por el que nombra instructor del expediente.

**Tercero.-** El día 25 de noviembre de 2005, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia del mismo al interesado (que recibe la notificación el día 2 de diciembre), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos, sin que el interesado, durante el plazo concedido al efecto, haya presentado escrito de alegaciones o documentación alguna.

En el mencionado escrito se pone en conocimiento del interesado que la valoración de los daños, de acuerdo con la tabla de precios aprobada para el pago de daños producidos por las especies en las reservas de caza, asciende a 1.980 euros.

**Cuarto.-** La propuesta de resolución, de 13 de enero de 2006, señala que procede estimar la reclamación presentada en 1.965 euros.

**Quinto.-** El 1 de febrero de 2006 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial informa favorablemente sobre la propuesta de resolución indicada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

**Sexto.-** Mediante Acuerdo de 23 de marzo de 2006 se requiere a la Consejería de Medio Ambiente para que complete el expediente con la incorporación al mismo de un informe complementario del agente medioambiental en el que se fije la fecha de producción del daño, así como de un informe sobre la valoración del daño. Además, se les indica que en el caso de que esta valoración no coincidiera con la señalada en el escrito por el que se



concedió el trámite de audiencia al interesado, sería conveniente que se le notificara la nueva cantidad propuesta en concepto de indemnización con el fin de evitar cualquier posible indefensión del interesado.

El 19 de junio de 2006 se registra de entrada el informe del agente medioambiental solicitado, aunque no se incluye referencia alguna a la valoración de los daños, reanudándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen.

## **II CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

**2ª.-** El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

No obstante, debe recordarse que conforme al artículo 89.3 de la Ley 30/1992 ya citada, la resolución (y también su notificación, de acuerdo con el tenor literal del artículo 58.2 de la referida ley) debe indicar los recursos que procedan contra la misma, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo para su interposición.

**3ª.-** Concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 142.2



de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

**4ª.-** El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.



d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

**5ª.-** El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación formulada por D. xxxxx como consecuencia de los daños ocasionados por el jabalí en unos terrenos de su propiedad.

De los documentos que forman parte del expediente puede llegar a deducirse que el interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, puesto que aunque no se indica la fecha de producción de los daños, éstos no pudieron tener lugar mucho antes de la comprobación realizada por el agente medioambiental, ya que, en caso contrario, no se habrían podido apreciar los efectos lesivos de la acción del jabalí. Puesto que la comprobación se efectuó el 3 de octubre de 2005, y la reclamación se presentó con fecha 22 de septiembre del mismo año, se puede considerar realizada dentro del plazo señalado en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 anteriormente citada.

En cualquier caso, debe señalarse la importancia de que las solicitudes de indemnización contemplen cuantos datos sean precisos para que pueda producirse, con el menor margen de error, la evaluación de los daños. Así, en la medida de lo posible, debería expresarse si el daño de la parcela es total o parcial, si ha quedado sin uso en la época en que se produce el daño o si puede tener efectos posteriores para su aprovechamiento; aspectos todos ellos que ayudarían al evaluador del daño y al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

A la vista de los informes obrantes en el expediente resulta acreditado que el origen de los daños se halla en la acción del jabalí en diversos parajes de



la localidad de xxxxx, dentro de una zona cinegética declarada vedado obligatorio.

El jabalí tiene la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. Además se considera pieza de caza, según el artículo 9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Por ello, el título de imputación de responsabilidad deriva directamente de lo previsto en el artículo 12.1.b) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en la redacción que tenía en el momento de producción del daño, a cuyo tenor "la responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá (...) en los terrenos vedados, a los propietarios de los mismos, cuando la condición de vedado se derive de un acto voluntario de estos, o a la Junta", razón por la que, determinada la naturaleza de vedado no voluntario de los terrenos en los que se produjo el daño, corresponde a la Junta de Castilla y León la indemnización de los perjuicios causados, conforme a lo establecido por los artículos mencionados.

En nuestra Comunidad Autónoma, el Tribunal Superior de Justicia también se ha pronunciado al respecto en supuestos semejantes de daños causados por animales procedentes de reservas regionales de caza (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, Burgos, núm. 29/2001, de 15 enero), señalando que "en la responsabilidad patrimonial de la Administración rigen los principios de responsabilidad objetiva (SSTS 25-2-1998 y 8-4-1998, entre muchas otras) y el de solidaridad (STS 17-5-1996, entre otras) que son instrumentos de carácter garantista o para «dar satisfacción a las exigencias propias del principio básico en la materia de la garantía del perjudicado, que, de otro modo correría el riesgo de quedar burlado» (STS de 25 de febrero de 1995)".

**6ª.-** En cuanto a la valoración de la indemnización, es preciso poner de manifiesto la discrepancia observada entre la cantidad consignada en el escrito remitido al interesado como preceptivo trámite de audiencia en concepto de indemnización (1.980 euros) y la que como tal se establece en la propuesta de resolución (1.965 euros).



A pesar del requerimiento efectuado por este Órgano Consultivo, no se ha realizado aclaración alguna en relación con la forma de cálculo de estas cantidades. El informe del agente medioambiental de 17 de mayo de 2006, como consecuencia de la petición de documentación complementaria realizada a instancia del Consejo, ratifica las superficies que el interesado señalaba como afectadas en su escrito de reclamación.

Puesto que, por lo tanto, no se puede apreciar ninguna minoración de la superficie dañada que justifique una disminución del importe de la indemnización, y dado que la cantidad señalada en este concepto en el trámite de audiencia es de 1.980 euros, se considera que éste es el importe indemnizatorio que ha de recibir el reclamante. Ello sin perjuicio de su actualización conforme a lo establecido en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

**7ª.-** No obstante el carácter favorable del dictamen, resulta obligado recordar la importancia que tiene el cumplimiento estricto del procedimiento legalmente establecido en cuanto garantía de la legalidad de la actuación administrativa; más aún cuando, como sucede en el presente supuesto concreto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, los trámites se han simplificado sustancialmente hasta configurar un procedimiento que puede calificarse como especialmente sumario o abreviado.

La tramitación del procedimiento resulta, así, tan defectuosa, que la motivación de la resolución que eventualmente pueda dictarse queda reducida al mínimo posible, pues se admite como cierto el daño causado, así como su origen, sin que se acompañe una manifestación expresa de las razones que llevan a tal consideración. No debe olvidarse que, en definitiva, las resoluciones que conceden una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración suponen el manejo de fondos públicos, cuya aplicación y destino deben venir acompañados, en todos los casos aunque siempre dentro de un criterio razonable, de las mayores garantías.

Por ello, el Consejo debe insistir en la necesidad de dar cumplimiento estricto al procedimiento legalmente establecido, máxime cuando, como sucede en el presente caso, se trata, según se ha expuesto, de un procedimiento extraordinariamente simplificado.



**CONSEJO  
CONSULTIVO**  
DE CASTILLA Y LEÓN

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados por el jabalí en unos terrenos.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.